



12° CONGRESO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

La Plata, junio y septiembre de 2021

GT 18: Antropología de las intervenciones estatales y judiciales en el campo de la infancia, la familia y el parentesco: burocracias, derechos y activismo

Cuando la lógica judicial irrumpe la institución escolar. Denuncias por abuso sexual en jardines de infantes.

Gabriela Scarfó, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires / Área de Educación, Universidad Nacional de Moreno. gabyscarfo@gmail.com.

Resumen

La irrupción judicial en instituciones escolares viene creciendo significativamente en los últimos años. Se trata de un fenómeno presente en todos los niveles educativos que llegó incluso a afectar a padres denunciados por la toma de escuelas secundarias en las que participaron sus hijos e hijas. Frente a los diversos contenidos y actores que pueden tener las denuncias judiciales, a los fines de esta investigación interesan particularmente los casos de docentes denunciados por abuso sexual de niñas y niños pequeños (entre 3 y 5 años).

Desde el ámbito académico, la judicialización de las relaciones escolares comenzó a ser pensada como consecuencia de la fragilización de las instituciones escolares y la escalada del individualismo en sociedades regidas por lógicas neoliberales. Una línea de análisis señala la falta de contrato escolar entre maestros y familias y la necesidad de reactualizar dicho contrato a partir del declive de las instituciones escolares. Desde estas primeras aproximaciones al problema, la propuesta de este trabajo es complejizar las miradas macro sociales del fenómeno con los aportes de documentar aquello que acontece en la vida cotidiana escolar cuando un/a docente es denunciado/a por abuso sexual infantil.

La hipótesis que guía el análisis parte de entender al abuso sexual como un *intolerable* social que fuerza la necesidad de encontrar culpables. Como consecuencia, la denuncia que inicia en un docente puede, en ocasiones, implicar una cadena de responsabilidades que termina atravesando a toda la institución escolar. En este proceso, la capacidad de respuesta que pueda dar el sistema penal parece primar sobre la posibilidad que tiene la escuela de construirse como espacio de solución y de reparo para niños/as, padres y docentes.

En términos metodológicos, se trata de una investigación histórico-etnográfica centrada en el territorio de Merlo, Moreno e Itzaingó donde las denuncias a docentes por abuso sexual crecieron significativamente luego de que en el año 2019 se hiciera pública una condena a 17 años de prisión. Para este trabajo, el foco estará puesto en la reconstrucción de este caso a partir de entrevistas abiertas y en profundidad a diversos actores de la *comunidad* educativa.

Palabras clave: *infancia; familias, escuela; judicialización.*

Introducción

Desde el año 2012 soy profesora de Antropología en una Licenciatura en Educación en la Universidad Nacional de Moreno a la que asisten maestras de nivel inicial. En una clase en el año 2017 emergió el tema de las denuncias judiciales a docentes. De las veinte estudiantes que estaban ese día en el aula, cinco atravesaban una situación de denuncia o de haber sido “casi” denunciadas. Todas por casos de abuso sexual infantil. El mérito de haber visibilizado el tema fue de una de mis estudiantes que con una honestidad absoluta se puso de pie en el medio de la clase y dijo “chicas, yo soy Julieta Díaz¹”. El nombre y apellido de la estudiante no era significativo para mí pero muchas de sus compañeras asociaron de inmediato ese nombre con una denuncia que había sacudido el territorio hasta hacía algunos pocos años. El clima de confianza que se generó permitió que otras cuatro estudiantes

¹ Los nombres de las personas e instituciones mencionadas fueron cambiados para mantener el anonimato de quienes participan y colaboran con esta investigación.

contaran situaciones personales relacionadas con acusaciones de esta índole². Desde ese momento, empecé a pensar que si un veinticinco por ciento de mis estudiantes habían sido acusadas de delitos de abuso sexual, algo estaba pasando en el territorio, en las escuelas y en la justicia.

Al mismo tiempo, comencé a notar las huellas que las acusaciones y denuncias iban dejando en las prácticas escolares. Algunas maestras señalaban el temor a ser denunciadas, temor que se hacía presente en los momentos de “tocar” a los niños/as para, por ejemplo, cambiarles el pañal. Recuerdo discusiones en clase sobre la necesidad o no de pedir autorización por escrito a las familias para cambiar a un/a niño/a pequeño/a. Algunas docentes mencionaban que “la resolución” así lo exigía. Sin embargo, no existía en ese momento (ni ahora) una norma escrita que obligue al jardín de infantes a tener autorización para cambiar a un niño/a. Por el contrario, existen normativas escolares que responsabilizan a las docentes por el cuidado integral de los niños pequeños que implican, entre otras prácticas de cuidado, un cambio de pañal³. En definitiva, el hecho de empezar a necesitar una autorización por escrito de padres y/o madres para realizar una tarea que históricamente asumió el jardín como práctica de cuidado, fue una de las primeras señales de que algo había cambiado en las escuelas. Es interesante señalar además, que ninguno de los casos de denuncia documentados hasta ahora, hacen mención o se relacionan con el momento de higiene de los niños/as.

En el 2019, las denuncias a docentes volvieron a hacerse presentes en la clase. Pero esta vez fue a partir de un fallo condenatorio que sentenció a 17 años de prisión a una maestra de nivel inicial y a un profesor de música denunciados en 2013, unos meses antes de producirse la denuncia a mi estudiante Julieta Diaz. El desarrollo del juicio y el fallo fue publicado como noticia periodística en algunos

² Los casos eran todos distintos. El más emblemático, por supuesto, era el de Julieta Diaz que en el 2015 había sido llevada a juicio y declarada inocente. Otras docentes tenían denuncias que no habían prosperado por “falta de pruebas” pero que habían implicado el desplazamiento del cargo. Una última, había sido acusada “en la escuela” pero el conflicto no había llegado a convertirse en una denuncia judicial.

³ El Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires (Decreto N° 2299/11) establece en su artículo 37 que todo el personal docente debe “Cumplir con el cuidado integral de los alumnos, conforme con las prescripciones legales vigentes”. Asimismo el texto de la Ley Provincial de Educación (Ley N° 13.688/07) contempla el cumplimiento de la Ley Provincial 13.298/05 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños cuyo artículo 1 establece “la promoción y protección integral de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos (...)”

medios locales y en redes sociales. Desde ese momento y hasta que finalizó el ciclo lectivo, el territorio escolar que contempla tres importantes distritos de zona oeste del conurbano bonaerense no dejó de recibir nuevas denuncias por abuso sexual y ahora también, por maltrato infantil. Las denuncias compartían la particularidad de ser radicadas en la fiscalía zonal. Se produce así un efecto multiplicador de las denuncias a partir de la difusión y tratamiento del tema en los medios de comunicación que puede ser leído (o no) en clave de aporte a la visibilización del problema. Sin embargo, el debate sobre el tratamiento judicial en los medios de comunicación será objeto de análisis de otro trabajo. En esta ponencia me interesa describir y analizar el efecto multiplicador que tiene al interior de la institución denunciada pues detrás de una primera denuncia, se suman otras y la escuela, como institución, comienza a estar completamente bajo sospecha.

En este contexto, los efectos de las denuncias de abuso sexual en la relación entre familias y escuela son el objeto de análisis de esta ponencia y guían las primeras preguntas de esta investigación: ¿qué sucede cuando aparece una denuncia de abuso sexual infantil en un jardín de infantes? ¿Cómo lidian con esa situación docentes, directivos y padres? ¿Qué margen de acción tiene la escuela? ¿Cuál es la repercusión social de este acontecimiento?

Breve descripción del campo empírico y el caso bajo análisis

Los casos de denuncias a jardines de infantes públicos documentados en esta investigación se circunscriben al conurbano bonaerense, territorio que destaca por su concentración poblacional y por sus elevados niveles de pobreza material en relación con el promedio nacional y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires⁴ (Beccaria, 2017). En este contexto, los jardines de infantes públicos en el conurbano responden a las necesidades educativas y de cuidado de familias de sectores populares. Y si bien la oferta del nivel inicial contempla los dos ciclos, maternal e

⁴ Me refiero al área territorial que contempla ocho regiones y 33 municipios pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, ubicados alrededor de los límites de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 13.473/06). Según el Censo Nacional de Población (año 2010) el 24% de la población de la República Argentina vive en el conurbano. Asimismo, según el documento *La pobreza en el Conurbano Bonaerense* la incidencia de la pobreza en el Conurbano llega a triplicar la situación de la CABA (34,1% y 9,2%, respectivamente) y los niveles del promedio nacional, aunque de manera más moderada, son menores también que en el Conurbano Bonaerense (30,4%) (Beccaria, 2017:10).

infantes⁵, el territorio concentra su oferta en jardines de infantes por lo que es posible anticipar que las denuncias se producen en los primeros años de acercamiento de las familias a la institución escolar.

El foco de esta ponencia estará puesto en el análisis del caso del Jardín de Infantes N°1 ubicado en una de las regiones escolares más importantes del noroeste del conurbano. La escuela se ubica, además, en un distrito escolar que interesa particularmente a los fines de este trabajo porque concentra una cantidad significativa de denuncias judiciales a docentes de jardines de infantes. Por sus características históricas y edilicias es un jardín “modelo”, el primero en inaugurarse en el centro de la ciudad cabecera del distrito. Alberga a 400 niños/as distribuidos en 14 secciones en turno mañana y tarde. Tiene un parque muy grande y arbolado. Pese a las denuncias recibidas, continúa siendo un jardín de referencia en la zona y no ha sufrido pérdida de matrícula, un indicio que permite suponer la valoración social de la institución.

El Jardín N°1 recibe su primera denuncia por abuso sexual en el año 2013. La denunciada es la maestra de sala de 4 años a la que llamaré Vanesa. Tiene 30 años aproximadamente y dos hijos. Es maestra suplente. La principal denunciante es la familia de una niña de la sala que radica la denuncia en la fiscalía. Cuando la notificación llega a la Jefatura Distrital se inicia un sumario administrativo que indica como primera y urgente medida, el desplazamiento de Vanesa del cargo. Se trata de una medida cautelar enmarcada en el Estatuto Docente e indica el relevo transitorio de funciones, es decir, la maestra pasa a cumplir funciones en otra dependencia administrativa de la Dirección General de Cultura y Educación (Art. 140 del Estatuto Docente, Ley 10579). La niña de cuatro años deja de asistir al jardín y la familia pide el pase a una institución de gestión privada. El cargo de Vanesa lo cubre una maestra suplente. A los pocos días de la primera denuncia, otra familia radica la misma denuncia contra la misma docente⁶. La niña deja también de asistir al jardín.

⁵ Según la Ley de Educación Nacional 26.206/06 el nivel inicial que abarca dos ciclos; jardín maternal para niños y niñas desde los 45 días a los 2 años y jardín de infantes que contempla las edades de 3, 4 y 5 años.

⁶ En adelante, utilizo el plural “familias denunciantes” porque si bien la denuncia inicia en todos los casos documentados con un caso, sucede siempre que se suma a la brevedad al menos otro caso de la misma sala. En decir, no se trata nunca de un solo caso ni de una sola familia.

Dos años después, en el año 2015, el Jardín N°1 recibe una nueva denuncia (de la primera familia denunciante) que esta vez involucra al profesor de música. Al igual que Vanesa, el profesor de música, al que llamaré Gonzalo es desplazado de su cargo. Gonzalo tiene aproximadamente 30 años y es padre de una niña de 5 años. Trabaja en la institución hace algunos años. Su cargo es cubierto por otro docente de música.

Transcurridos dos años más, en el 2017, la directora del jardín es acusada por “falso testimonio” en el mismo caso. Se la acusa de “encubrir” a los dos docentes denunciados. La jefatura distrital resuelve una vez más el desplazamiento del cargo. La directora, a quien llamaré Mirta, trabaja en el Jardín N°1 desde hace treinta y cuatro años, prácticamente toda su carrera profesional. Fue alumna del mismo y directora desde hace veinte años. Tiene 55 años cuando es desplazada. Está seis meses en esa condición y decide pedir la jubilación.

En mayo del 2019 se produce el juicio a los dos docentes denunciados. Ambos comparten la misma abogada que es además, una “madre del jardín”. El fallo en primera instancia los determina “culpables” y los sentencia a 17 años de cárcel. Son detenidos el mismo día del juicio y alojados en unidades penales dependientes del servicio penitenciario bonaerense. Ninguno de los dos había estado nunca antes detenido, sin embargo, quedaron alojados en una cárcel y privados de su libertad. Vanesa tiene ahora casi 40 años y un tercer hijo con apenas dos años que queda al cuidado de sus abuelos. Gonzalo tiene 38 años y una nueva pareja. Su hija tiene ahora 12 años y no la volverá a ver. Los padres de ambos docentes son adultos mayores, ninguno de ellos estaba presente en el juicio. Los padres de Gonzalo, de hecho, no estaban al tanto de la denuncia.

En los meses siguientes a la detención, Gonzalo continúa con la misma abogada y Vanesa cambia a su representante, contrata ahora al abogado que seis años atrás defendió a Julieta Díaz. Ambos abogados llevan el caso al tribunal de Casación Penal. Mientras el proceso penal continúa, a comienzos del año 2020, Vanesa obtiene el beneficio del arresto domiciliario por ser madre de un niño menor de cinco años.

A comienzos del 2021, el Tribunal Penal de Casación rectifica el fallo condenatorio a los dos docentes. Los abogados llevan ahora el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que aún no se expidió. Gonzalo continúa detenido en una cárcel de Bahía Blanca y Vanesa con prisión domiciliaria. En la defensa de los dos docentes se suma el asesoramiento de una abogada penalista, reconocida públicamente por su trayectoria laboral como letrada pero también por haberse desempeñado en cargos públicos como jueza, fiscal y asesora en cámara de Diputados y Senadores. También como docente en la universidad pública. Su reconocimiento dentro del colectivo de docentes se deba a que ha defendido con anterioridad a docentes denunciados por abusos sexuales y ha salido públicamente con declaraciones a favor de la inocencia de sus defendidos y en contra de los peritos psicológicos que actúan en estos casos. Lo ha hecho tanto en medios de comunicación como en actividades académicas sobre el tema.

Por su parte, la directora del jardín, elige un reconocidísimo abogado mediático para patrocinarla. No tiene experiencia en casos de denuncia a docentes pero sí en casos de mucha visibilidad pública. Mirta, continúa jubilada pero hizo la carrera de acompañante terapéutica y trabaja de ello. Está pendiente de cada paso que da la justicia. Al momento de escritura de esta ponencia, había realizado ya las pericias psicológicas y psiquiátricas determinadas por el fiscal de la causa.

La denuncia como momento de interrupción de la cotidianidad escolar

Cuando una escuela se notifica de una denuncia de abuso sexual la cotidianidad escolar se interrumpe. La información circula muy rápidamente y docentes y familias se enteran casi al mismo tiempo. El clima escolar se tensiona y la sensación de un conflicto inminente invade a directivos y autoridades educativas. La denuncia los interpela a todos y emergen los miedos y temores. La comunidad escolar se quiebra y aunque el jardín sigue funcionando ya nada es como antes. La denuncia de abuso sexual representa en ese sentido un parteaguas en la vida cotidiana escolar. ¿Por qué? Porque la imagen que representa el abuso sexual en tanto forma extrema del maltrato infantil es intolerable para todos, más aún para los padres, madres y docentes involucrados.

Para analizar los sentimientos y emociones que emergen frente al maltrato infantil, Julieta Grinberg recupera los aportes de Didier Fassin y Patrice Bourdelais (2005) y señala que:

“lo intolerable” es una norma y un límite históricamente construidos y, por lo tanto, modificables a través del tiempo. En cada sociedad, “los intolerables” se organizan a partir de una escala de valores que incita a una jerarquía moral. Una característica que comparten los intolerables contemporáneos, es que, más allá de su diversidad, todos ellos se inscriben sobre el cuerpo. Los comportamientos que en las sociedades occidentales contemporáneas se denominan maltrato infantil constituyen un claro ejemplo de “lo intolerable” (Grinberg, 2015, p. 82).

Si los intolerables se relacionan con el cuerpo, en el espacio escolar es plausible pensar que ciertos comportamientos como “agarrar a un niño de un brazo” son considerados actualmente como maltrato infantil lo que puede entenderse como un buen indicio de la desnaturalización de formas de violencia históricamente invisibilizadas en el espacio escolar. Ahora bien, no sucede lo mismo cuando se trata del abuso sexual. La violencia sexual no estuvo nunca naturalizada en las escuelas. Como sostiene Grinberg el abuso sexual infantil definido como toda “situación en la que un adulto utiliza su interrelación con un menor con el objeto de obtener satisfacción de sus deseos o necesidades sexuales” (Romano, 1986, p.14) es “el más intolerable de los intolerables” sobre todo si se produce al interior de la familia. Así, la historización del concepto muestra que su visibilización emerge de denuncias que se concentran en el seno familiar:

En Estados Unidos, es en la década de los setenta que el movimiento contra el maltrato infantil hace eco de las denuncias realizadas por el feminismo, incorporando a su lucha la cuestión del abuso sexual hacia los niños en el seno de la familia. En Argentina, es recién a mediados de los años ochenta que el tema comienza a ser discutido en la literatura sobre maltrato infantil, siendo sobre todo en la década de los noventa que el mismo adquiere mayor transcendencia en el espacio público local (Grinberg, 2015, p.83).

En este punto, corresponde señalar que si el abuso sexual es intolerable cuando se produce al interior de la familia, no lo es menos si se produce al interior de una escuela. Por el contrario, la escuela trae consigo la representación social de ser el “segundo hogar” en el cual la maestra jardinera construye una identidad que refuerza lo maternal detrás del estereotipo de “segunda mamá” (Fernández Pais, 2017) en un espacio definido como semidoméstico y semipúblico (Batallán, 2007). En este punto, los jardines de infantes son espacios feminizados donde es poco frecuente encontrar a un maestro varón. Al respecto es interesante señalar que si bien la escuela naturalizó el estigma con el que históricamente cargaban los docentes-varones (en su mayoría profesores de música y/o de educación física) de ser “potenciales abusadores” por su sola condición de varones no sucede lo mismo con las maestras jardineras⁷ (Brailovsky, 2008). La experiencia genéricamente estigmatizada de los docentes-varones trasladada a las docentes-mujeres resulta un intolerable pues socava profundamente los cimientos de la educación infantil donde el rol de las mujeres como cuidadoras rara vez había sido puesto en cuestión, y menos aún, en términos sexuales. Simultáneamente, el hecho que la denuncia iniciada contra una docente mujer gire dos años después e incluya al único docente varón del jardín como partícipe necesario del acto que se denuncia, parece demostrar la profecía del docente varón como potencialmente abusador.

Familias y escuela: una tensión inherente a la relación que las une

El registro histórico y antropológico de las complejas relaciones entre familias (madres fundamentalmente) y escuelas (fundamentalmente maestras) no estuvo nunca exenta de tensiones (Batallán y Varas, 2002; Santillán y Cerletti, 2011; Siede, 2015). Sin embargo, en las últimas décadas, el rol disciplinador que históricamente tuvo la escuela -principalmente en los niños pero por extensión a las familias- ha sido puesto en cuestión. Asimismo, la profundización de la desigualdad como consecuencia de políticas del neoliberalismo produjeron un escenario que acentúa las demandas mutuas entre espacios domésticos como la familia y los públicos

⁷ Brailovsky (2008) sostiene que la presencia de docentes varones en un mundo de infancia ocupado históricamente por mujeres asumió la sospecha sobre ellos como resultado de los propios discursos escolares en torno a masculinidad, sexualidad y violencia.

como la escuela (Santillán, 2009) y concentra las tensiones en la figura docente en tanto mediador entre Estado y sociedad civil (Batallán, 2007).

En este marco, Siede (2015) señala una serie de “nuevas tensiones” entre familias y escuelas entre las que se destacan los problemas de confianza, autoridad y legitimidad, tres elementos relevantes para entender las tensiones que se profundizan cuando una denuncia llega a la escuela. La pérdida de la confianza – entendida como hipótesis sobre la conducta futura del otro (Cornú, 1999)- señala la sospecha sobre la integridad ética de unos (docentes) y de otros (familias); la crisis de autoridad refiere a la sospecha sobre la capacidad del otro (en este caso los/as docentes) para intervenir en las tareas de las que son responsables; y finalmente, la legitimidad refiere al interrogante respecto a qué se considera una legítima ocupación de la escuela.

En este punto cobra relevancia la tensión fundacional del nivel inicial que se debate entre la lógica del cuidado y la atención, y la lógica específicamente educativa (Scarfó y Gonzalez, 2016). Desde el comienzo, el nivel inicial estuvo atravesado por el conflicto entre enfatizar la función asistencial devenida de una particular visión del niño pequeño, sus necesidades de cuidado y asistencia; o acentuar la función pedagógica que las instituciones educativas que reciben niños/as pequeños/as debieran cumplir (Itzcovich, 2013). En la actualidad esta tensión se traduce en un conjunto de posibilidades para los/as niños/as pequeños/as que incluye el cuidado en el seno familiar, la atención en centros de cuidado infantil (con mayor o menor grado de informalidad), y la escolarización en instituciones educativas con proyectos pedagógicos adecuados a las especificidades del nivel. Esta última opción, viene siendo fortalecida como resultado de acuerdos internacionales que desde los años '90 señalan el valor de la educación inicial estableciendo que el aprendizaje comienza en el nacimiento y que “el cuidado y la educación” de la primera infancia es un componente esencial de la educación básica⁸. Como resultado, el contenido

⁸ A este respecto se puede mencionar la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtiem, Tailandia, 1990); la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Nueva York, EEUU 1990); el Foro Mundial de Educación para Todos reunido en Dakar (Senegal, 2000) y el Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia (OEA, 2007).

educativo ha ganado terreno beneficiado por la extensión progresiva de la obligatoriedad escolar de la sala de cinco y cuatro años⁹.

No obstante los avances normativos que refuerzan el lugar de la escuela como espacio de educación y cuidado, la particularidad que en la primera infancia sean necesarias -más fuertemente que en otras etapas escolares- prácticas vinculadas al cuidado de los cuerpos (como cambiar un pañal, acompañar a los/as niños/as al baño o incluso realizar un cambio de muda de ropa) pareciera reactualizar el contenido de aquella tensión inherente a la relación entre familias y escuelas, en un contexto social y político donde los aspectos vinculados al cuerpo sexuado muestran ser una de las grandes ansiedades y temores escolares (Scharagrodsky, 2007).

Las maestras jardineras

Las sensaciones que manifiestan las docentes frente a una denuncia de abuso sexual son de angustia, bronca y en muchas ocasiones, temor. La angustia se vincula en la certeza compartida de que aquello que se denuncia no sucedió o al menos, no sucedió en la escuela. La duda tiene lugar, pero gana lo inverosímil del contenido denunciado pues los hechos que se denuncian no parecen ser verdaderos o posibles de suceder en una escuela:

Docente 1: [los padres] empiezan a plantear que era el abuso de parte de ambos [docentes]. Que ella [la maestra] era parte de la generación de la situación de abuso. Uno, en general las denuncias cuando uno las lee les parece, o sea, transitando la escuela, eh, no te las podés imaginar que pasen ahí. O sea, si realmente eso pasa ahí todos saben que eso pasa ahí. Porque no hay manera de que estén los 30 chicos desnudos, digamos, ya sacarle las zapatillas para subirlos al pelotero te lleva un rato largo... ¿no? (Docente y dirigente gremial, entrevista realizada el 01/11/2019)

Directora 1: Porque los relatos son locos. Lo que dicen los padres son locuras!
Nadie que conozca mínimamente puede comprender que en veinte minutos más o

⁹ En nuestro país la obligatoriedad de la sala de 5 años de edad se estableció tempranamente en 1993 a partir de la Ley Federal de Educación (Ley N° 24.195). La obligatoriedad de la sala de 4 años y la universalización de los servicios educativos para los/as niños/as de 3 años de edad quedó establecida recién en 2014 con la Ley N° 27.0455 que modifica los artículos 16, 18 y 19 de la vigente Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.606) sancionada en el año 2006.

menos, que es lo que dura una clase de educación musical o física, entre que los organizan a todos los pibitos... los de educación física, le atan los cordones a todos... En veinte minutos, desvestían a todos, treinta y tres chicos, hacían lo que los padres dicen que hacían y los volvían a vestir. Y los 28 o 30 restantes no dijeron nada? (Directora jubilada, entrevista realizada el 20/09/2019)

Directora 2: ...si la denuncia hubiese sido, suponete, 'ay, la maestra lo tocó'. Y yo no estoy en las 7 salas a la vez. No te puedo decir. Pero si a mí me dicen que toda la sala estaba sin ropa, la maestra estaba sin ropa, yo ya sé que eso no puede ser porque son más de... esa sala tenía 26 nenes. Suponete que faltaron 10 como una barbaridad, que no faltaban tantos, 16 nenes... sacarles toda la ropa...

GS: ¿esa es la acusación, que los 16 estaban desnudos?

Directora: ellos dicen que la sala completa. Que a todos los nenes le sacaban la ropa, que la maestra los chupaba a ellos, que hacía que la chupen a ella en el horario de la clase de música, que dura 20 minutos, que casi nunca se da dentro de la sala, digo casi nunca porque alguna vez puede pasar que se dé en la sala. Pero casi nunca. Se da en el salón de música. Está con las ventanas abiertas a la calle...

GS: claro.

Directora2: o sea que es muy improbable. Pero bueno, yo digo bueno, si es posible de que haya pasado que se demuestre con pruebas. (Directora del Jardín N° 1, jubilada, entrevista realizada el 26/03/2021)

En ese punto, lo intolerable no es la representación del abuso sexual sino la idea de injusticia que interpela a la mayor parte del colectivo docente. Como manifestación de ese intolerable, el lunes siguiente a que se dictara la condena a los dos docentes del Jardín N°1, la mayor parte de los jardines del distrito se movilizaron a la puerta del juzgado a mostrar su disconformidad con el fallo. Ese día no hubo clases en casi ninguno de los más de sesenta jardines de infantes del distrito y alrededor de setecientas maestras jardineras se trasladaron en nueve micros que puso a disposición un sindicato docente hasta el juzgado. Dada la histórica poca participación política y sindical que tiene el nivel inicial, la participación masiva de docentes en un acto de protesta en el espacio público es un dato significativo que da cuenta del desacuerdo profundo con la medida condenatoria.

Si la angustia –y su potencial transformación en broncas y enojos con el sistema judicial- es una sensación que prima, no es menor tampoco el temor que siente una parte significativa de las maestras. De hecho, la palabra “miedo” es reiterada en las entrevistas y se hace evidente que las docentes tienen miedo. La re-pregunta me permitió descubrir que el miedo responde al temor a que “nos caguen a palos”. Empecé por ello a documentar cómo cada una de las denuncias y en el caso del Jardín N°1 el fallo condenatorio, trae consigo una ola de violencia, amenazas, piquetes en la puerta del jardín, gomas quemadas, autos rotos y en ocasiones golpes a los docentes, de la mano de padres y madres consternados por el contenido de aquello que se denuncia:

Docente 2:... [los padres] ni siquiera fueron a hablar con la institución y ahí comenzó también todo lo que es un tiempo de lucha... porque las familias... no todas las familias del jardín... pero hubo un grupo que se unieron y fueron al jardín... como pasó en el jardín 108 y en 165, hace poco, fueron las familias y empezaron a agredir, a ser violentos, a apedrear el jardín...al profe del jardín 108 fueron hasta la casa... le pegaron... él es un hombre grande que vivía con su mamá y lo lastimaron... porque él quiso defenderse... salió en la televisión... Y bueno... así empezó toda esta situación... (Docente, entrevista realizada el 22/07/2019)

El miedo a que los padres tomen represalias abarca principalmente al docente denunciado “...era difícil porque los padres querían saber... esta madre [denunciante] quería saber dónde estaba, pero nosotros teníamos miedo por la casa, porque son padres que no sabés hasta dónde pueden llegar (Directora 3, jubilada, entrevista realizada el 07/04/2021)”, pero también al jardín que es -luego de realizarse la denuncia en una fiscalía y en ningún caso antes- el centro de los reclamos de las familias denunciantes acompañadas por al menos un grupo de padres:

Directora 3: una [maestra jardinera] tenía mucho miedo, una persona muy insegura que era preceptora y, este, dijo no yo esto no, no puedo, me indigna que

haya, o sea, confiaba que no había pasado nada porque ella era preceptora también a la tarde ahí, dice, no, yo no puedo, me da mucho miedo...

GS: ¿miedo de qué?

Directora 3: y porque te da miedo. Yo nunca tomé conciencia...

GS: ¿pero miedo a que te denuncien?

Directora 3: miedo a la situación. Porque ¿sabés lo que es dar clases con ese clima de que te iban a prender fuego el jardín? (Directora 3, jubilada, entrevista realizada el 07/04/2021)

En el imaginario de las docentes respecto a la potencialidad de la violencia de las familias denunciantes se hace presente una y otra vez el relato de uno de los primeros casos que sacudieron al territorio cuando un profesor de música fue denunciado por abuso sexual en el año 2007. Se trataba de Juan, un docente de música en un jardín privado del distrito. Fue detenido por primera vez en octubre de 2007, luego de que la madre de un niño de cuatro años lo denunciara por haber abusado sexualmente de su hijo. Posteriormente, se sumaron otros casos de familias denunciantes. En 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal correspondiente [dictó sentencia](#) por mayoría, lo halló culpable y lo condenó a 30 años de prisión. La fiscalía presentó siete denuncias, pero solo cinco fueron consideradas a la hora de aplicar la sentencia. En junio de 2014, el Tribunal de Casación Provincial lo absolvió en cuatro hechos y le redujo la pena a ocho años y seis meses de prisión, tiempo que ya había cumplido y quedó, por ese motivo, en libertad. En octubre de 2016 es atacado y golpeado en la Catedral del distrito, durante un "escrache" de un grupo padres que se identificó –según el registro fotográfico de medios de comunicación– como padres de familia cuyas remeras decían “con los chicos no”. Juan murió luego de un mes de internación en el hospital. Tenía 43 años¹⁰.

Ninguna de las docentes entrevistadas recuerda los pormenores del caso ni las fechas exactas en las que sucedieron, sin embargo, conocía al docente porque fue colega suyo en el jardín, porque fue colega de alguna compañera, porque alguna conocida estaba el día que fue atacado en la Catedral, porque leyó la noticia en su

¹⁰ El caso es reconstruido fundamentalmente a partir de fuentes secundarias (noticias en medios locales y sus repercusiones en canales de televisión) donde aparecen testimonios de padres, el abogado del docente y el párroco de la Catedral.

momento o porque alguien se lo comentó. Es decir, se trató de un caso con mucha visibilización (yo misma lo conocía) que finalizó con la muerte del docente acusado de abuso sexual en un acto que pareció ser “justicia por mano propia”.

Frente al temor de recibir alguna agresión, el jardín recurre en ocasiones a las fuerzas de seguridad, reforzando así la imposibilidad de la propia institución de contener el conflicto:

Inspectora1: Eh... bueno, el día lunes [primer día de clase posterior a la sentencia del jardín 109] fue un día complejo, porque los docentes querían ir a hacer un abrazo simbólico al jardín, pero los padres querían ir a prender fuego el jardín prácticamente. No fue, no ocurrió, pero sí había una convocatoria, este, en contramarcha, digamos. Así que bueno, yo le di aviso a la policía, que hizo, que hizo posta ahí para evitar disturbios, a los bomberos, y bueno, todo un equipo de... toda la semana trabajamos con pequeños grupos de inspectores adentro de jardín, turno mañana y turno tarde, para acompañar toda la jornada, eh... y si los padres necesitaban explicaciones se las dábamos... eh... algunos no, algunos decían que no era necesario. (Entrevista realizada el 18/05/2021)

Finalmente, cuando la angustia calma pero el miedo continúa, las docentes logran organizarse para “defenderse”. La palabra “defensa” es también reiterada en los diálogos que mantuve. Las docentes se organizan y se defienden. Hacen rifas y colectas para “ayudar a pagar” los costosos honorarios de peritos y abogados. Las compañeras docentes más experimentadas en acompañar casos de denuncias, conocen la importancia de tener un abogado/a sólido/a con experiencia en estos casos y fundamentalmente, costear un perito de parte que debata con el perito oficial el informe de las pericias que se realizarán a los niños/as denunciados. No es un dato menor que en el juicio a los dos docentes del Jardín N°1 no hubo perito de parte pues ambos consideraron –en palabras de sus colegas- que “no los necesitaban” pues eran “inocentes”.

Las maestras también se juntan, discuten y elaboran una resolución de “resguardo y reparación” que se presenta a la gestión educativa para proteger a los docentes denunciados. Organizan “abrazos” al jardín denunciado y los llevan a cabo incluso con padres que las acompañan. Realizan marchas a los tribunales e irrumpen en el

espacio público con carteles que buscan visibilizar su situación y dicen: “con los chicos no, con los docentes tampoco”. Se acompañan entre ellas y cuando la docente denunciada lo permite, también a ella.

Docente 2: [...] a ella [Vanesa] la llevan a la comisaria, entonces cuando nos avisan que va a estar ahí durante cuatro horas... a ella la derivan a una cárcel de Necochea [...] nosotras vamos a la comisaria... como un abrazo para acompañarla y no se sintiera tan sola. Y fuimos [...] a ella la llevaron de allí a las 3am, hicimos un abrazo, nos tomamos de las manos mientras ella salía. (Docente, entrevista realizada el 22/07/2019)

La sensación de desprotección prevalece, muchas docentes desearían una estructura mayor que las cobije y defienda en estos casos. Es habitual por ello que recurran a su gremio docente para solicitar un representante legal. Sin embargo, no tengo registro de ningún gremio que lo haya hecho. Por ello, cuando un/a docente recibe una denuncia penal, puede hacer uso del defensor oficial que le provea el Estado, recurrir a un defensor “conocido/amigo” que se quiera comprometer con llevar la causa penal o afrontar los altos costos de contratar un abogado con experiencia en estos casos. Esta última opción que suele ser la más recomendable es difícil de afrontar para un docente desplazado. Los/as docentes denunciados cuentan solo con su sueldo como trabajadores del Estado pero incluso éste pudo haberse perdido por el desplazamiento, quedándose entonces sin ningún ingreso.

Docente2: En este tiempo transcurrido, nos cuidamos entre nosotras, me parece... nadie más, porque sabemos cómo trabajamos, sabemos lo que damos. No sé si es algo bueno o malo... pero es lo que he sacado en este tiempo, nos acompañamos entre docentes, entre auxiliares, entre la comunidad, entre nosotras. Es lo que siento como docente, trabajando en el jardín. Me parece que esa lucha es importante, la más. Y si no nos cuidamos entre nosotras, nadie nos va a cuidar. (Docente, entrevista realizada el 22/07/2019)

Con todas estas sensaciones presentes en el cuerpo, las maestras jardineras continúan yendo a trabajar y reciben a los/as niño/as con el miedo que se señaló en el inicio. Ningún jardín denunciado cierra sus puertas por ello.

Las familias denunciantes

Si bien el trabajo de campo realizado hasta el momento recupera centralmente las voces de maestras, directoras e inspectores, hay algunos indicios para una primera aproximación al accionar de las familias frente a casos de denuncia de abuso sexual. Como se desprende de las palabras de una inspectora no todos los padres requieren explicaciones. De hecho, si bien algunos participan en “escraches”, otros se suman a los “abrazos” al jardín. Pero sin lugar a dudas, gana visibilidad el grupo de padres indignados con las docentes y por extensión, con el jardín.

Inspectora1: la comunidad educativa estaba sumamente convulsionada y compungida por la decisión del caso, que habían sido 17 años de prisión con una resolución, con un fallo que fue por unanimidad contra los docentes. Entonces los docentes estaban sumamente compungidos por eso, pero había un sector de padres que estaba totalmente indignado. (Entrevista realizada el 18/05/2021)

En este punto es importante recordar que, en la mayoría de los casos, los padres buscan la resolución del conflicto en la justicia y por ese motivo las denuncias inician siempre en una fiscalía. La notificación a la institución escolar llega a través de la justicia que –policía mediante- acerca una notificación a la docente. Es decir, los padres no informan a la escuela ni antes ni después de hacer la denuncia. En ese sentido, no hay demanda de resolución a la institución escolar, ésta se reduce a ser un espacio denunciado que espera el dictamen de la justicia y en ese proceso, es objeto de mucho rechazo e indignación.

En el caso del Jardín N°1 la indignación que atraviesan fundamentalmente las familias denunciantes se ve reflejada en el armado de una organización civil que reclama “Basta con los abusos en el jardín”. La misma dio origen a una comunidad virtual¹¹ que se aloja en Facebook desde mayo de 2017. Tiene aproximadamente 900 seguidores. Se encuentran allí varias publicaciones en torno al caso de Vanesa

¹¹ Entiendo a las comunidades virtuales en los términos de Magallanes Udovicich “un conjunto de personas que se agrupan en el ciberespacio en torno a intereses comunes y que establecen vínculos entre ellos, utilizando como medio de comunicación y relación las herramientas hipermediales que brinda la Internet (Magallanes Udovicich, 2010: 3).

y Gonzalo, sin embargo, la mayoría de ellas tiene en común mostrar casos de adultos (principalmente docentes y/o preceptores pero también curas y en menor medida padres o familiares) denunciados por abusos sexuales cometidos contra niño/as. Las publicaciones suelen estar acompañadas de comentarios que claman por medidas radicales a la justicia tales como cadena perpetua o pena de muerte.

Como se dijo desde el comienzo, el grupo de familias denunciantes y quienes las acompañan en su denuncia, suele ser un grupo minoritario de madres y padres del jardín pero dada la gravedad de lo que se denuncia, cobran mucha visibilidad. En contraposición, en el caso del Jardín N°1 es emblemático el hecho de que la abogada defensora de los dos docentes sentenciados era (y continúa siéndolo en el caso de Gonzalo) una madre del jardín. En ese sentido, es posible anticipar pese a que resta avanzar en el trabajo de campo con las familias, que la duda sobre lo inverosímil de hechos denunciados, atraviesa también a algunas familias del jardín.

Finalmente, vale señalar que la división que se genera al interior de las familias no es exclusiva de ellas. De hecho, pos sentencia, algunos jardines que colaboraban económicamente para ayudar a cubrir los altos costos que el sistema penal ocasiona en caso de una denuncia, dejaron paulatinamente de hacerlo. La gremial docente a la que estaba afiliada Vanesa y que colaboró en algunas tareas administrativas de los dos docentes desplazados, recibió pedidos de desafiliación al gremio “porque defienden a pedófilos”. Del mismo modo, está el inspector/a que apoya a los docentes y está quien duda de ellos. Si el contenido de la denuncia era inverosímil para muchos, la sentencia contraria a los docentes, genera -en ocasiones- dudas sobre aquello que hasta el momento de la sentencia parecía ser una certeza.

Inspectora1:... y bueno, fue duro, porque vuelvo a decirte, eh, yo no, yo, como docente, la docente de hace 24 años, no la jefa de ese momento, a mí me resulta imposible pensar que se pueda, que pueda ocurrir una cosa así adentro de un jardín o adentro de una escuela. Porque uno sabe la cantidad de cargos y de gente que hay circulando adentro de una escuela, y tendría que ser una persona sumamente rebuscada de la cabeza, ya con muchos problemas para poder hacer semejante cosa. Pero también vuelvo a decirte, pensando ayer, y te nombré a Jimena porque era una chica conocida nuestra, eh, tenía mi edad, tendría hoy mi

edad Jimena Hernández¹², este, murió adentro de una pileta de una escuela católica violada.

GS: sí.

Inspectora1: y pasó adentro de una escuela. Entonces, eh, las cosas no pasan pero en algunos momentos ocurren. Y yo no tuve absolutamente nada que ver en ese tribunal, en ese juzgado. Y hubo 3 jueces que lo dictaminaron por unanimidad.

(Entrevista realizada el 18/05/2021)

A modo de cierre

De igual forma a cuando se produce una denuncia en el seno familiar donde la lógica judicial indaga a todo el círculo familiar (dando lugar a una suerte de inversión del principio jurídico de la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario), la denuncia que llega a la escuela, pone a toda la institución bajo sospecha y es posible -como en el caso del Jardín N° 1- que una situación que inicia con una acusación a una maestra pueda incluir luego a un profesor de música, más tarde también a la directora del jardín e incluso fortalecerse por el incremento de familias denunciantes.

Frente a la gravedad y contenido de lo que se denuncia, se mostró cómo el sistema educativo activa sus medidas de resguardo, separa inmediatamente a los docentes involucrados y los desplaza a cumplir funciones administrativas. El desplazamiento asegura dos cuestiones fundamentales, velar por el interés superior del niño (dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 4 de la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de los Niños, niñas y Adolescentes) al mismo tiempo, resguardar la integridad física de los docentes amenazada por la furia de quienes denuncian. A partir de allí, las relaciones entre familias y escuelas se tensan, las familias denunciantes buscan hacer visible la denuncia -y especialmente los nombres de los docentes denunciados- y las docentes buscan defenderse y cuidarse de las consecuencias que implica una denuncia por abuso sexual. Finalmente, todos (familiares, docentes y autoridades del sistema educativo) esperan la resolución judicial.

¹² Jimena Hernández era una niña de 11 años que apareció muerta en una pileta de natación de una escuela católica de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. El caso no se resolvió nunca y el colegio sigue funcionando con un cambio de nombre.

A modo de cierre, sostengo que lo intolerable del abuso conduce a la necesidad de encontrar uno (o varios) culpables. Una necesidad que en esta sociedad y en ese contexto social e histórico pareciera sólo poder responder el sistema penal. Es interesante señalar que ambas partes involucradas (familias denunciantes y docentes denunciados) esperan (¿y confían?) la resolución de la justicia, una respuesta que no deja margen de acción ni de resolución de la situación a la propia institución escolar. Una escuela bajo sospecha es en ese sentido, una institución que espera ser juzgada por otro. En esa espera, se hace visible cómo la lógica judicial pone en duda el trabajo docente y opaca el potencial del saber pedagógico que tiene la escuela para discutir en la esfera pública el contenido de aquello de lo que se la acusa. En ese sentido, si como señala Trebisacce (2018) el feminismo se equivoca en delegar la solución (punitiva) al Estado, no es menos cierto que la escuela transita esos mismos pasos no pudiendo construirse como espacio de resolución y de reparo ni para los niños y sus familias ni para los/as docentes.

Referencias Bibliográficas

- Batallán, G. y Varas R. (2002). *Regalones, maldadosos, hiperkinéticos. Categorías sociales en busca de sentido. La educación de los niños y niñas de cuatro años que viven en la pobreza urbana*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Batallán, G. (2007). *Docentes de infancia. Antropología del trabajo en la escuela primaria*. Buenos Aires: Paidós.
- Beccaria, A. (2017). La pobreza en el Conurbano Bonaerense. *Documentos del Observatorio*. Observatorio del Conurbano Bonaerense. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Bourdelaís P. y Fassin D. (2005). Les frontières de l'espace moral. En: Fassin D. y Bourdelaís, P. (eds) *Les Constructions de l'intolérable. Études d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace moral*. París: La Découverte.
- Braislovsky, D. (2008). Educación Infantil y Masculinidades. El caso de los maestros jardineros varones. En Morgade, G. y Alonso, G (comps.) *Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la "normalidad" a la disidencia*. Buenos Aires: Paidós.

- Cornú, L. (1999). La confianza en las relaciones pedagógicas. En: Frigerio, G., Poggi, M. y Korinfeld, D. (comps). *Construyendo un saber sobre el interior de la escuela*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativa.
- Fernández Pais, M. (2017). Organización y lucha docente en el Nivel Inicial. *Revista Voces en el Fénix*, año 8 número 66. Diciembre.
- Grinberg, J. (2010). De malos tratos, abusos sexuales y negligencias. Reflexiones en torno al tratamiento de las violencias hacia los niños en la ciudad de Buenos Aires. En: Villalta, C. (comp.) *Infancia, justicia y derechos humanos*. Bernal: Universidad nacional de Quilmes.
- Grinberg, J. (2015). Entre la pediatría, el psicoanálisis y el derecho: apuntes sobre la recepción, reelaboración y difusión del “maltrato infantil” en Argentina. *Revista de estudios sociales*, ISSN-e 0123-885X, N°. 53, 77-89.
- Itzcovich, G. (2013). *La expansión educativa en el nivel inicial durante la última década*. Cuaderno 16, SITEAL, septiembre.
- Magallanes Udovicich, M. (2010). “Identidades y pertenencia en comunidades virtuales: Posibles indicios”, En: *Actas de las IVX Jornadas de Investigadores en Comunicación “Investigación y participación para el cambio social”*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes
- Romano, E. (1986). Abuso sexual y violencia familiar. En Romero, E. (ed). *Maltrato y violencia infanto-juvenil*. Buenos Aires: Asociación Argentina para Unicef, 79-92.
- Santillán, L. (2009). Antropología de la crianza: la producción social de “un padre responsable” en barrios populares del Gran Buenos aires. *Revista Etnográfica*, 13 (2): 265-289
- Santillán, L. y Cerletti, L. (2011). Familias y escuelas: repensando la relación desde el campo de la Antropología y la Educación. *Boletín de Antropología y Educación* Año 2 - N° 03, Diciembre.
- Scarfó, G y Gonzalez, D. (2016). “Características de la oferta educativa del nivel inicial en el ámbito rural: las salas multiedad y multinivel”. Número 2, Serie Apuntes de Investigación, Diniee, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

- Siede, I. (2015). *Casa y jardín: complejas relaciones entre el Nivel Inicial y las familias*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- Scharagrodsky, P. (2007). *El cuerpo en la escuela*. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
- Trebisacce, C. (2018). Habitar el desacuerdo. Notas (nunca urgentes) para un elogio de la precariedad política. *Mora*, (24), 185-190.